

EL MILITANTE

ADENTRO

Lecciones y ejemplo de lucha de
mineros de Co-Op por un sindicato

—PÁG. 10

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

VOL. 71/NO. 33 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Presentan apelación de cinco cubanos presos en EUA

POR CHERYL GOERTZ
Y SAM MANUEL

ATLANTA—Los abogados de cinco revolucionarios cubanos presos en cárceles de Estados Unidos argumentaron en una audiencia ante un panel de jueces federales que tuvo lugar aquí el 20 de agosto, que las sentencias de los cinco hombres deben ser revocadas por la conducta inapropiada del fiscal y la insuficiencia de la evidencia presentada para probar las acusaciones de “conspiración” para cometer espionaje y asesinato. También argumentaron que las condenas, que van desde 15 años de cárcel hasta cadena perpetua, fueron inusualmente severas dadas las debilidades de la evidencia.

La sala de la corte estaba llena de partidarios de los Cinco.

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y René González han estado encerrados en prisiones estadounidenses desde 1998. Una corte federal los declaró culpables y los sentenció bajos cargos fabricados en un juicio en Miami en 2001. Los cinco estaban en este país para vigilar a los grupos contrarrevolucionarios cubano americanos en Florida que han realizado ataques violentos contra Cuba con la complicidad de Washington.

En agosto de 2005 un panel de tres jueces del Decimoprimer Circuito del

Sigue en la página 11

Marcha en L.A.: ‘No a redadas y deportaciones’

POR CHRIS REMPLE

LOS ANGELES, 25 de agosto—Unas 2 mil personas marcharon hoy por el centro de esta ciudad exigiendo la legalización de inmigrantes indocumentados y el fin a las redadas y deportaciones por la migra.

Los manifestantes también exigieron que las autoridades estadounidenses permitan el regreso de Elvira Arellano, una ex limpiadora de aviones en el Aeropuerto O’Hare de Chicago, quien fue arrestada aquí y deportada a México el 19 de agosto. Desde su arresto en una redada en el trabajo en 2002, Arellano ha luchado públicamente contra los esfuerzos del gobierno de deportarla. En el último año se había refugiado en la iglesia Unitaria Metodista Adalberto en Chicago.

En una rueda de prensa el 20 de agosto en el edificio federal aquí, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles, convocó la marcha. Dos días después una amplia gama de grupos pro derechos de los inmigrantes realizaron una conferencia de prensa para anunciar la formación de la coalición Somos Todos Elvira y Saulito Arellano (su hijo) para luchar por el regreso por vía legal de Arellano y el fin a las separaciones de familias.

La Opinión y *Hoy*, dos periódicos de habla hispana aquí, publicaron artículos sobre la manifestación en los días previos a esta. El locutor de radio Eddie Sotelo, mejor conocido por su personalidad radial, El Piolín, anunció su apoyo.

La protesta empezó con un breve

Sigue en la página 10

Utah: cierran mina por ‘cuestiones de seguridad’

Mineros airados por cesantías, afán patronal de ganancias



Militante/Chris Hoepfner

Beneficio del 25 de agosto en Helper, Utah, para familias de mineros atrapados en derrumbe.

POR ALYSON KENNEDY

HUNTINGTON, Utah, 27 de agosto—Tras los mortíferos derrumbes en la mina Crandall Canyon, que han mantenido enterrados a seis mineros y matado a otros tres hombres, la compañía minera Murray Energy Corp. ha anunciado que la mina Tower, otra de sus minas en Utah, será cerrada temporalmente debido a inquietudes sobre la seguridad de la mina. El presidente de la compañía Robert Murray anunció el 26 de agosto que por lo menos unos 170 mineros serán cesanteados de las minas Tower y West Ridge en el condado Carbon en Utah.

Murray ofreció empleo a los trabajadores en minas de su propiedad en Illinois y Ohio. Dijo que serán albergados en un barracón, trabajarán tres

semanas sin parar, y entonces recibirán una semana libre para que puedan visitar a sus familias en Utah.

“Esta es un arreglo malo”, dijo al *Militante* Jeremy Bailey, de 31 años, quien acaba de ser cesanteado de la mina West Ridge. “¿Quién puede hacer eso realmente? Tengo una familia y no la voy a dejar. No hay mucho tiempo para decidir”. A los trabajadores les dieron uno o dos días para tomar una decisión.

Bailey trabajó en la operación de rescate en la mina Crandall Canyon después de que seis mineros quedaron atrapados tras un masivo derrumbe en las profundidades de la mina.

Muchos mineros y funcionarios de seguridad dijeron que un “sacudón” — un estremecimiento de la montaña causado por la presión intensa y el extenso minado del carbón— causó el derrumbe de los costados de la mina y el levantamiento del piso por más de dos pies. Los mineros quedaron atrapados bajo unos 2 mil pies de roca y carbón.

La Murray Energy recibió en junio un permiso de la Administración para la Seguridad y Salud en las Minas (MSHA) para empezar operaciones de minería de repliegue en la Crandall Canyon. En este tipo de minería, considerada una de las operaciones más peligrosas, se remueven los pilares de carbón que sostienen el techo, al mismo tiempo que la cuadrilla de mineros se va replegando, dejando que el techo se venga abajo.

Durante la operación de rescate, explicó Bailey, el estaba operando una pala mecánica para remover los escombros de la entrada de la mina e intentar encontrar a los mineros atrapados cuando se dio un sacudón. La fuerza fue tal que su máquina quedó cubierta con escombros.

“Me tumbó”, dijo Bailey. “No podía ver nada, había tanto polvo. Solo pude salir siguiendo la voz de alguien que llamaba mi nombre”.

El 16 de agosto otro sacudón resultó en un segundo derrumbe, que mató a tres trabajadores involucrados en el rescate y lesionó a otros seis. La operación

Sigue en la página 11

Después de estar preso tres años sin cargos, José Padilla es sentenciado por ‘conspiración’

POR DEBORAH LIATOS

MIAMI—Un juez federal de esta ciudad declaró a José Padilla culpable de cargos de conspiración para realizar “terrorismo” el 16 de agosto tras 11 horas de deliberación. Fue declarado culpable junto a Adham Hassoun y Kifah Jayyousi de conspiración para cometer asesinato en el extranjero. Serán sentenciados el 5 de diciembre y podrían recibir la cadena perpetua.

Los fiscales federales basaron su caso contra Padilla —que es parte de la “guerra contra el terrorismo” del gobierno noreamericano— principalmente en lo que describieron como un formulario para asistir a un campamento de entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán en el año 2000. Nunca presentaron pruebas de que estuvo en el campamento.

José Padilla, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en mayo de 2002 en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago cuando arribaba de Pakistán. Funcionarios norteamericanos alegan que Padilla era un agente de al-Qaeda con planes de activar una “bomba sucia”

radioactiva en Estados Unidos. Dos días antes que un juez escuchara argumentos desafiando el encarcelamiento de Padilla sin que se halla presentado cargo alguno, la administración Bush lo declaró un “combatiente enemigo” y lo transfirió a una prisión naval en Carolina del Sur. Los funcionarios estadounidenses insistieron que como “combatiente enemigo” pueden detenerlo indefinidamente.

Padilla fue encarcelado ahí en una celda pequeña y bajo aislamiento por tres años y medio, sin cargos y sin acceso a su familia o abogados, aun cuando estaba siendo interrogado. Cuando salió de la celda tenía los ojos vendados y sus oídos cubiertos. El gobierno niega que fue maltratado.

Después de que la Corte Suprema consideró escuchar su caso para decidir si el encarcelamiento indefinido de un ciudadano estadounidense viola la Constitución del país, funcionarios norteamericanos lo transfirieron de la custodia militar a una prisión federal en Miami y decidieron concederle un juicio como ciudadano civil.

¡Alto a las redadas y deportaciones!

La respuesta necesaria al incremento en las redadas de centros de trabajo y comunidades por parte de la policía de inmigración es la organización de acciones públicas amplias que exijan: ¡Legalización incondicional para todos los inmigrantes ya! ¡Alto a las redadas y deportaciones!

Para contrarrestar los esfuerzos de los patrones de usar las redadas para sembrar miedo y dividir a los trabajadores, el movimiento obrero debe oponerse a todas las redadas y deportaciones así como a todos los ataques contra los inmigrantes. El pueblo trabajador necesita organizar sindicatos y usar el poder sindical en la defensa de los indocumentados y para combatir eficazmente el ataque patronal contra las condiciones laborales, los niveles de vida y los derechos de todos los trabajadores.

Estos ataques antiobreros van desde las redadas en las fábricas, a la imposición de leyes en muchos pueblos que buscan convertir a los trabajadores indocumentados en criminales, prohibiéndoles buscar trabajo, obtener viviendas o servicios locales. También se han enlistado contra el pueblo trabajador grupos derechistas como el Minutemen y el Movimiento Socialista Americano de corte fascista, que han estado dirigiendo sus ataques a los trabajadores nacidos en el extranjero en el Medio Oeste y en otros lugares.

Sin embargo, muchos trabajadores no han sido intimidados. Su animo ha sido capturado en la consigna

“¡Somos trabajadores, no somos criminales!” Los jornaleros en Virginia y en otras áreas se han manifestado y organizado conferencias para exigir su derecho a buscar trabajo sin el acoso de la policía. Se realizaron protestas en varias ciudades después que la migra arrestó y deportó a Elvira Arellano, una ex trabajadora en el aeropuerto de Chicago quien se convirtió en un símbolo claro de la resistencia de los trabajadores inmigrantes.

Estas luchas son una señal que los trabajadores inmigrantes están ganando confianza a medida que se integran a la clase trabajadora en Estados Unidos por millones. A medida que se desarrolla este proceso la clase trabajadora en su totalidad se fortalece.

Un indicio de estos cambios es la amplia solidaridad que existe entre los trabajadores hoy día con los seis mineros atrapados en una mina en Utah, que incluye a mineros mexicanos así como a mineros nacidos aquí. Los trabajadores inmigrantes son parte de las discusiones que hay entre mineros de esa región sobre como luchar contra las condiciones inseguras y sobre la necesidad de organizar sindicatos.

Promover las protestas a favor de los derechos de los inmigrantes que tendrán lugar en septiembre y octubre nos da la oportunidad de involucrar a más trabajadores en la batalla por el estatus legal pleno para todos los inmigrantes y el cese inmediato de todas las deportaciones y redadas de la migra.

Cierran mina por ‘cuestiones de seguridad’

Viene de la portada

de rescate subterránea fue suspendida. Tres de estos trabajadores continúan hospitalizados.

La ira entre trabajadores de las comunidades mineras del centro de Utah ha continuado a medida que los hechos sobre las prácticas mineras de la Murray Energy salen a la luz, y después de que funcionarios de la compañía dijeran que quizás los hombres nunca serían encontrados y que posiblemente los iban a dejar enterrados en la mina.

El sindicato minero UMWa informó el 24 de agosto que los mineros de la Crandall Canyon le habían solicitado al sindicato que los representara en las investigación del desastre que realizará la MSHA.

Familiares de los mineros atrapados han obtenido abogados y han solicitado la ayuda del UMWa, según informes en la prensa local.

Algunos políticos capitalistas han llamado a que el Congreso realice una investigación. El gobernador de Utah Jon Huntsman anunció el 23 de agosto que ha establecido una Comisión de Seguridad en las Minas de Utah que conducirá una investigación por separado.

El anuncio fue hecho unas cuantas horas después que Huntsman, quien ha tratado de distanciarse de Murray, atacó públicamente al dueño de la mina por comportamiento “poco escrupuloso” hacia las familias de los seis trabajadores atrapados.

Murray respondió al gobernador a través de una carta que ha sido difundida ampliamente por los diarios de Utah. Afirmando que las declaraciones del gobernador eran dañinas a la reputación de la compañía, dijo, “Si persiste en sus declaraciones y curso de acción, usted, gobernador, va a poner en peligro a 700 empleos en los condados de Carbon y Emery. No puedo mantenerlos solo y definitivamente no puedo hacerlo si voy a ser su chivo expiatorio”.

Unos cuantos días después Murray anunció las cesantías.

La compañía dice que las cesantías serán temporarias y que durarán hasta que los ingenieros mineros y expertos digan que la mina Tower es “segura” y pueda ser abierta de nuevo.

Sin embargo, los mineros reportan que las condiciones inseguras en la mina Tower no son nuevas.

La mina Tower se encuentra a unos 2 800 pies debajo de la superficie de la montaña y existen planes de excavar otros 400 pies más, informó el *Salt Lake Tribune* el 27 de agosto. Según el Utah Geological Survey (Peritaje Geológico de Utah), esto es más “profundo que en cualquier otra [mina] en la que se ha podido utilizar con éxito una máquina [para minería de carbón] de tipo *longwall* en Estados Unidos. Entre

más profunda es la mina, más potencialmente peligrosas son las condiciones.

Los registros de accidentes y lesiones de MSHA en la mina Tower indican que los sacudones son algo común. Se han reportado diez sacudones este año, cuatro de los cuales han producido lesionados y seis que han movido la maquinaria pesada o han detenido la producción. En uno de estos incidentes el 20 de mayo, un sacudón hizo que comenzaran a volar piezas de carbón hiriendo la cabeza de un minero que requirió puntadas.

En enero de 2006, Shane Jacobson murió en la mina Tower mientras operaba maquinaria para cortar carbón. Un sacudón expulsó pedazos de carbón que lo golpearon mortalmente.

Esta fue la tercera muerte en la mina Tower en 10 años.

De las 10 minas que se encuentran en operación en Utah, siete de ellas están de 1 600 a 2 000 pies debajo de la superficie, según el Buró Federal de Manejo de Tierras. Los mineros informan que son comunes en las minas de Utah las condiciones inseguras.

El 23 de agosto la mina Dugout Canyon, que pertenece a la Arch Coal, fue evacuada debido a altos niveles de monóxido de carbono. MSHA dijo que ocurrió un incendio frente a la sección de *longwall* de la mina.

Matt Madden, de 27 años de edad, era un estibador en la cercana mina Horizon hasta hace unas semanas, cuando un perno usado en el techo lo golpeo en el pecho y le rompió cuatro costillas y le partió el esternón.

“Porque los vehículos para transporte nunca funcionan, les tomó tres horas sacarme de la mina y otra hora y media llevarme al hospital”, dijo Madden al *Militante*.

Madden relató que ha expresado inquietudes que los pernos que se usan para asegurar el techo son muy cortos. “Lo reporte a la gerencia y me dijeron que MSHA dijo que estaba bien usar pernos de seis pies de largo. Yo se que no es seguro. Hemos tenido bastantes derrumbes de techo en Horizon”, dijo.

Madden trabajó previamente en la mina Willow Creek en Helper, Utah, cuando un incendio en la mina en julio de 2000 mató a dos personas y lesionó a otras ocho. Con el resto de su cuadrilla regresó a la mina y sacaron a los sobrevivientes y los muertos.

“Necesitamos al sindicato”, dijo Madden, refiriéndose a la mina Horizon y otras minas donde no hay sindicatos. “Nosotros los mineros sabemos lo peligroso que es, pero los patrones no nos escuchan. Con el sindicato podemos hacer que nos escuchen”.

Cinco de Cuba

Viene de la portada

Tribunal de Apelaciones en Atlanta anuló las sentencias dictaminando que los cinco hombres no habían recibido un juicio justo en Miami. Un año más tarde el panel pleno de 12 jueces revocó esa decisión, a la misma vez que permitió que se apelarán otros aspectos.

Dirigiéndose a otro panel de tres jueces de la misma corte, el abogado de la defensa Richard Klugh señaló que el gobierno nunca probó los cargos de espionaje. Un alegato clave fue que ellos buscaban infiltrar los cuarteles del Comando Sur de Estados Unidos en Miami. Pero los Cinco nunca pusieron un pie allí; la acusación más seria que el fiscal pudo haber hecho es que ellos habían “vigilado” el edificio.

También los acusaron de contar aviones que arribaban a la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa.

De los 20 mil documentos incautados de las computadoras de los cinco hombres, ninguna fue considerada clasificada.

Uno de los cinco fue condenado por reportar cosas “que pudieron aparecer en el *Miami Herald*”, dijo Klugh.

Gerardo Hernández fue declarado culpable de “conspiración para cometer asesinato”. Los fiscales alegaron que él envió información a las autoridades cubanas que fue usada para derribar aviones usados por Hermanos al Rescate en 1996, un grupo derechista en Miami con un historial de ataques violentos. Los aviones hostiles habían violado el espacio aéreo cubano y se les había advertido que regresaran. La defensa señaló que no se había presentado ninguna evidencia en el juicio que demostrara que Hernández tenía conocimiento de los planes de Cuba de derribar a los aviones.

La abogada defensora Brenda Bryn dijo que la conducta inapropiada del fiscal en el juicio viola las reglas de la corte y exigió que se le otorgue a los Cinco un nuevo juicio. Señaló que 28 de las 34 objeciones hechas en contra del fiscal durante los argumentos de clausura fueron aceptadas por el juez. “Me preocupa esa cantidad”, dijo el juez Phyllis Kravitch al fiscal Carolyn Miller.

Como ejemplo de los esfuerzos inapropiados para afectar el resultado del juicio, Bryn señaló que en su argumento de clausura el gobierno declaró que los cinco cubanos estaban “empeñados en la destrucción de Estados Unidos, con salarios de los impuestos de los norteamericanos”.

En una recepción celebrada el día anterior en la que participaron más de 70 partidarios de la campaña para liberar a los cinco, uno de los abogados de los cinco, Leonard Weinglass, comentó sobre la severidad de las condenas. Dijo que tres de los cinco cubanos habían recibido la misma cadena perpetua que Robert Hansen, Aldrich Ames y Robert Walker. Ellos trabajaban para el FBI, la CIA y la Marina, respectivamente, y fueron condenados por entregar centenares de páginas de documentos clasificados a un gobierno extranjero. En el caso de los Cinco de Cuba “no hay una sola pieza de papel clasificada”, dijo Weinglass.

Los abogados dijeron que pueden pasar varios meses antes de que los jueces de la corte de apelaciones emitan un fallo.

Los partidarios de la campaña internacional por la libertad de los Cinco de Cuba están planeando una serie de eventos públicos a partir del 12 de septiembre, el noveno aniversario de su arresto. Para más información contacte al Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos (www.freethetfive.org) o a distribuidores locales del *Militante* (vea directorio en página 8).

Tarifas de suscripción y dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde hallar distribuidores del *Militante* y de *Nueva Internacional*, así como una gama completa de libros de Pathfinder.

El ejemplo de la lucha de los mineros de Co-Op por una unión

A continuación publicamos extractos de artículos del Militante del 6 de junio y 3 de julio de 2006, que relatan las lecciones y el ejemplo de la lucha de los obreros en la mina de carbón Co-Op en Huntington, Utah, para formar un local del sindicato minero UMWA. El 22 de septiembre de 2003 unos 75 mineros salieron en huelga en la mina Co-Op de la compañía C.W. Mining para reclamar condiciones seguras de trabajo, salarios decorosos y respeto en el trabajo. En los siguientes dos años y medio, ganaron apoyo muy amplio entre mineros y otros trabajadores. Libraron una huelga de 10 meses y derrotaron una demanda hostigatoria entablada por los patrones. Esta batalla por la sindicalización sirve de ejemplo para los mineros en Utah y todo Estados Unidos que piensan que los sindicatos son vitales para hacer valer las normas de seguridad y salud en las minas frente a la mortífera campaña de productividad de los patrones.

Los artículos se refieren al hecho que en 2006 una corte federal desestimó los cargos de difamación de la compañía y otras acusaciones contra el UMWA, 16 mineros y otros que habían brindado apoyo o informado sobre la lucha de sindicalización.

POR NORTON SANDLER

SAN FRANCISCO—“Ganamos la batalla en la mina Co-Op debido a la fuerza de nuestra lucha y la solidaridad que recibimos de muchos sindicatos por todo el país e internacionalmente y de los trabajadores como ustedes que están aquí hoy”, dijo el minero Bill Estrada.

“La cuestión de seguridad y de condiciones de trabajo fueron una preocupación central de los mineros de Co-Op y una de las razones principales por las que acudimos al sindicato minero UMWA”, dijo Estrada [en un evento del Militant Labor Forum].

“Necesitamos sindicalizar las minas. Así podremos movilizar el poder sindical para protegernos, incluyendo poder salirnos de la mina cuando las condiciones sean muy peligrosas. Con nuestros comités de seguridad a la cabeza, se pueden trabajar las minas de una manera segura y ningún minero tiene que morir”.

Estrada describió la lucha realizada por 75 mineros en la mina Co-Op, propiedad de la compañía C.W. Mining Company.

“Los mineros, en su mayoría oriundos de México, ganaron todas las rondas de esta lucha, desde el día que salimos en huelga hasta el día en que se llegó al acuerdo que acabamos de finalizar”, dijo Estrada.

Los trabajadores de las minas vecinas miraban el ejemplo de los mineros de Co-Op. Un grupo de choferes de camiones de carga establecieron contacto con el sindicato para sindicalizarse. Se dieron discusiones sobre realizar líneas de piquetes afuera de las plantas eléctricas que estaban utilizando carbón de Co-Op. También había nuevas posibilidades de involucrar a trabajadores de los ferrocarriles.

“Pero los mineros no podíamos librar esta lucha solos”, dijo Estrada. “Teníamos poca experiencia en este tipo de batalla. Teníamos que encontrar trabajos para sobrevivir. Necesitábamos más ayuda de un movimiento obrero más amplio que el que habíamos logrado ganar a nuestra causa hasta entonces. Como resultado de esto no pudimos aprovecharnos de las posibilidades genuinas de avanzar en la organización



Militante/Terri Moss

Mineros de Co-Op y partidarios marchan a la mina Co-Op en Huntington, Utah, el 6 de julio de 2004, tras oferta patronal de que regresaran a sus puestos después de 10 meses de huelga.

sindical”.

“La lucha de los mineros de Co-Op subraya porque la lucha por la legalización de millones de trabajadores indocumentados en este país es tan importante”, señaló Estrada.

Fallo de juez: otro golpe a Co-Op

El 1 de mayo el juez federal de distrito, Dee Benson, falló en los pedidos para desestimar la demanda federal en contra de los acusados que quedaban en el caso. Benson dijo que la compañía no había establecido un caso de difamación valido contra el *Salt Lake Tribune* y el *Deseret Morning News* y desestimó la demanda contra estos periódicos. En la misma decisión Benson también desestimó la demanda completa contra los 16 mineros declarando que los “trabajadores tienen derecho a sus opiniones. Tienen derecho a expresar esas opiniones, estén o no en una disputa laboral”.

Cuando se combina la decisión del juez con las conclusiones de la NLRB [Junta Nacional de Relaciones Laborales] de que C.W. Mining había despedido a los mineros por actividad sindical, quedó claro que habíamos logrado que la compañía retrocediera en cada uno de sus intentos por derrotarnos, dijo Estrada.

“No tuvimos que sacrificar ni una sola cosa con este acuerdo. La realidad es que solo una partidaria del UMWA, Alyson Kennedy, era elegible para ejercer su derecho de regresar a trabajar”, dijo Estrada. “Pero Alyson y los otros mineros ya habían decidido mucho tiempo atrás que no querían ser parte de un local del UMWA que solo lo era en nombre.

“Sin embargo, es muy importante decir que nada en este acuerdo previene a partidarios del UMWA de organizarse de nuevo en esta mina”, dijo Estrada. “Si mañana la mayoría de los trabajadores en Co-Op, o en seis meses, o un año, firman tarjetas a favor de ser representados por el UMWA, toda la campaña de sindicalización puede comenzar de nuevo”.

POR NORTON SANDLER

PRICE, Utah—“Los mineros en mi cuadrilla me ayudaron bastante, aunque todos solo hablaban español y no podía entender la mayoría de lo que decían. Sí nos comunicábamos en cuestiones importantes”, dijo [la minera de la Co-Op Alyson] Kennedy.

“Me preguntaban cuanto me pagaban. Les dije 7.50 dólares la hora. La mayoría de la cuadrilla ganaba menos aunque tenían más tiempo que yo de estar ahí. Me preguntaban cuanto me pagaron en las otras minas. Les dije que de 18 a 20 dólares la hora, porque había un sindicato

en esas minas”.

Los mineros ganaron confianza “cada vez que hicieron frente a los patrones”, continuó [al hablar en un evento auspiciado por el sindicato].

“Empezamos a hablar de cómo cambiar estas condiciones en la primavera y el verano de 2003. Decidimos reunirnos y discutir cómo hacerlo. Ante esto, la compañía empezó a suspender a mineros.

El 22 de septiembre de 2003, cuando el minero Bill Estrada llegó al trabajo, dijo Kennedy, “un patrón le dijo que firmara un papel aceptando que sería despedido la próxima vez que no revisara el equipo según las reglas. Bill dijo que no firmaría. Lo suspendieron por tres días con miras a despedirlo, y lo mandaron a casa. Bill pudo explicar a su cuadrilla lo que había pasado.

“Cuando corrió la voz sobre la suspensión, decidimos ir a la oficina de la

gerencia y decirle a la patronal que no regresaríamos hasta que restituyeran a Bill. Más de 50 mineros estuvimos horas en la oficina”, dijo.

La compañía llamó al sheriff. Llegaron dos carros del sheriff y los patrones les pidieron que sacaran a los obreros, dijo Kennedy. “Uno de los sheriffs miró los dos autos de policía, después a los mineros, y dijo, “¿Dónde voy a ponerlos a todos?” El patrón respondió, “Todos están despedidos; sáquenlos ahora de la propiedad”.

Los obreros se fueron y convirtieron el cierre patronal en una huelga que duró 10 meses, durante la cual recibieron mucha solidaridad sindical. “Recuperamos nuestros empleos, incluyendo el de Bill”, dijo Kennedy. “Este logro fue resultado de la fortaleza de la lucha de los mineros y el UMWA”.

“La lucha por sindicalizar la mina Co-Op cambió las posibilidades para desarrollar el sindicato en la región”, dijo Kennedy. “Mineros no sindicalizados empezaban a discutir cómo cambiar sus condiciones de trabajo. Algunos venían a nuestras líneas de piquete y decían que necesitaban luchar por un sindicato. Nos decían que ganaban más que nosotros, pero que las condiciones en que trabajaban eran como las de nosotros en la Co-Op”.

Ante esta situación, los patrones entablaron su pleito judicial para desviar la lucha hacia los tribunales, anotó. “Pero los mineros, el UMWA y el apoyo más amplio que recibimos, especialmente entre los trabajadores en los condados de Carbon y Emery, permanecemos firmes y pudimos frenar nuevamente a la compañía”, dijo Kennedy. “Ahora también la demanda ha sido derrotada”.

Marcha contra deportaciones

Viene de la portada

mitin. María Elena Durazo, secretaria-tesorera ejecutiva de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Angeles, instó a los marchistas a luchar por la legalización y la reforma migratoria amplia. La seguridad de la marcha estuvo a cargo de miembros del Local 1877 del sindicato internacional de empleados de servicio SEIU.

Francisca Morales llevó un cartel que decía, “Los negocios cruzan las fronteras. Los trabajadores también pueden”. Morales dijo que la “sorprendió la marcha, toda la gente en frente de mí y atrás de mí”. Ella postergó estudiar para los exámenes finales para asistir.

“Esta marcha es un reconocimiento de que el pueblo trabajador pone esta lucha en el centro”, dijo José Sandoval, coordinador de Voluntarios de la Comunidad de San José, California. Ellos trajeron una camioneta llena de marchistas.

“Es mejor si tenemos centenares de miles”, dijo Sandoval “pero si tenemos

cientos está bien porque tenemos que luchar por esto”.

Una de últimas oradoras fue Strela Cervas del Centro Obrero Filipino. Cervas denunció las redadas por agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Llamó al alcalde Antonio Villaraigosa y al consejo de la ciudad de Los Angeles a que convirtieran a la ciudad en “un verdadero santuario para todos los inmigrantes”.

En San Diego, más de 100 manifestantes se reunieron el 23 de agosto para exigir que se le permita a Arellano regresar a Estados Unidos. Tres días después, unas 300 personas protestaron una ceremonia para inaugurar una estatua del ex gobernador de California Pete Wilson. Muchos usaron el evento para protestar contra las redadas y deportaciones.

Rick Trujillo y Sylvia Hansen en San Diego contribuyeron con este artículo.

De Pathfinder

El rostro cambiante de la política en EE.UU.

La política obrera y los sindicatos por Jack Barnes

Es una guía para quienes rechazan las desigualdades sociales, el racismo, la opresión de la mujer, la violencia policiaca y las guerras endémicas al capitalismo, y que están resueltos a derrocar ese sistema de explotación y unirse para reconstruir el mundo sobre bases nuevas y socialistas. También disponible en inglés, francés y griego. \$23

Contacte a distribuidores listados en página 8 ó visite www.pathfinderpress.com